

## **Gran preocupación por el ataque contra Bernardo Arévalo, Karin Herrera y la sociedad civil guatemalteca**

Nosotros, 13 organizaciones no gubernamentales de la Mesa Redonda Centroamericana, condenamos la actual campaña de criminalización de la Fiscalía General de Guatemala contra el gobierno electo, así como contra académicos, defensores de derechos humanos y otras voces críticas de la sociedad civil y política guatemalteca.

Las 27 órdenes de detención y las cinco detenciones del pasado 16 de noviembre representan un nuevo nivel de escalada. Los ataques a los que se enfrentan las fuerzas democráticas en Guatemala desde la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se han intensificado drásticamente. Nos preocupa especialmente la solicitud de la Fiscalía General de levantar la inmunidad al Presidente y Vicepresidenta electos, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, así como a otros seis actores políticos. Observamos con preocupación que no sólo está en riesgo la validez de los resultados electorales, sino también la libertad e incluso la vida de los ganadores de las elecciones y de otros miembros del Movimiento Semilla.

Las acciones de la Fiscalía General de la República se están justificando con la frágil acusación de que el Movimiento Semilla es responsable de las protestas y la ocupación de la Universidad de San Carlos (USAC). Las órdenes de detención y registro están dirigidas contra profesores, estudiantes y activistas que han hecho públicas irregularidades en la elección del rector de la institución.

La criminalización del derecho constitucional a la libertad de expresión es parte del procedimiento. Esto forma parte de la ofensiva de la Fiscalía General de la República contra la sociedad civil crítica y el partido Movimiento Semilla.

Cuenta con el apoyo de lo que popularmente se conoce como el "pacto de corruptos", formado por representantes de la élite del poder político, económico y jurídico del país, que tratan de asegurar su posición tras su inesperada derrota electoral. El objetivo del "pacto de corruptos" es excluir al partido de Arévalo del proceso político y poner todos los obstáculos posibles a su toma de posesión el próximo 14 de enero. Como ocurrió durante la campaña electoral, el "pacto" puede contar con el apoyo activo de las élites judiciales interesadas.

Condenamos los constantes ataques del "pacto de corruptos" contra el recién elegido gobierno y contra los civiles que defienden su democracia. En este momento crucial, decisivo no sólo para el futuro de Guatemala, sino también para toda la región centroamericana, la comunidad internacional debe adoptar una postura clara y actuar con decisión en favor de la democracia y el Estado de derecho.

Hacemos un llamamiento al Gobierno alemán y a la Unión Europea para que apoyen visiblemente una transición justa y pacífica en Guatemala. Una declaración conjunta de la Embajada de la República Federal de Alemania en Guatemala junto con las demás embajadas del G13 sería una señal importante. El apoyo al proceso de traspaso de poderes y al nuevo gobierno elegido democráticamente mediante la presencia de representantes de alto rango del Gobierno alemán y de la UE en la toma de posesión el 14 de enero de 2024 es clave. También solicitamos una declaración pública en la que se defienda la decisión electoral del pueblo guatemalteco, se pida la liberación de todas las personas encarceladas únicamente por motivos políticos y se califiquen las acciones del sistema judicial cooptado en Guatemala como perjudiciales para la democracia, en particular las de la fiscal general de la República, Consuelo Porras, el fiscal especial, Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana.